

Septiembre 28 de 1953

43ª REUNION — 35ª SESION ORDINARIA

Presidencia del señor **ANTONIO EDUARDO CORREA**,
vicepresidente del Honorable Senado

Secretarios: señores **ALBERTO H. REALES** y **SANTIAGO A. JOB**

SENADORES PRESENTES:

ALBARÍÑO, Ramón A.
AMADO, Elías Teodoro F.
ANGULO, Rodolfo Antonio
ANTINUCCI, Atilio
BAZÁN, Miguel Ángel
BRISOLI, Blas
CALVIÑO DE GÓMEZ, María Rosa
CASCO DE AGUER, María del Carmen
CASTANEIRA DE BACCARO, Hilda Nélida
CORREA, Antonio Eduardo
CORRECHÉ, Susana
DE PAOLIS, José Guillermo
DI GIROLAMO, Elena
DURAND, Alberto
FERRARI, Juan Antonio
GIMÉNEZ, Francisco
HERRERA, Paulino B.
IBARGUREN, Prudencio M.
ITURBE, Alberto J.
JUÁREZ, Carlos A.
LARRAURI, Juana
NAVARRO, Ramón M.
PIERANGELI VERA, Humberto
PINEDA DE MOLINS, Ilda Leonor
RIERA, Fernando
RODRÍGUEZ LEONARDI DE ROSALES, Elvira E.
RUIZ VILLASUSO, Eduardo Pío
VELAZCO, J. Filomeno
XAMENA, Carlos
ZAVALA ORTIZ, Ricardo

A CARGO DEL PODER EJECUTIVO:

TEISAIRE, Alberto

AUSENTE, CON AVISO:

LUCO, Francisco R.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo acompañando copia del decreto por el cual se pone en posesión del mismo al señor presidente provisional del Honorable Senado, contraalmirante (R.) Alberto Teisaire.

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se comunica la promulgación de la ley 14.224, modificatoria del Reglamento General de Tránsito.

III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, de Presidente Perón y territorio del Chubut.

IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre construcción de silos subterráneos.

V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo que declara sujetos a expropiación a inmuebles y materiales necesarios para la construcción de obras viales.

VI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la ley 3.367, de representación del fisco en los asuntos de jurisdicción voluntaria y contenciosa.

VII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se autoriza al Ministerio de Salud Pública a abonar a la señora Hipólita Escudero la suma de seis mil pesos.

VIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la garantía de la Nación otorgada por el decreto 14.055/53, para el cumplimiento y pago de la operación de préstamo que ha solicitado al Banco Industrial de la Nación con el objeto de atender las obligaciones derivadas del cumplimiento de su plan industrial, el IAME.

IX.—Comunicación de la Presidencia del Honorable Senado.

X.—Despachos de comisiones.

XI.—Petición particular.

2.—A moción del senador De Paolis, se fijan los asuntos a considerar en la sesión de la fecha.

3.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, de Presidente Perón y territorio del Chubut. Se aprueba.

4.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas, en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se declaran sujetos a expropiación varios inmuebles y materiales necesarios para la construcción de obras viales. Se aprueba.

5.—Consideración del despacho de las comisiones de Obras Públicas, de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos y de Agricultura y Ganadería, en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre construcción de silos subterráneos. Se aprueba.

6.—Consideración del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Políticos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre amnistía a infractores de las leyes de enrolamiento. Se aprueba.

7.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos, en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo acordando la suma de seis mil pesos a la señora Hipólita Escudero. Se aprueba.

8.—Moción de cuarto intermedio.

9.—Asuntos entrados:

XII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el cual se lo autoriza a solventar los créditos por indemnización de daños y perjuicios contra la quiebra de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires.

XIII.—Comunicación oficial.

XIV.—Despachos de comisiones.

10.—A moción del senador De Paolis, se fijan los asuntos a tratar en la sesión de la tarde.

11.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas, en el proyecto de ley del senador Teisaire y demás senadores, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación a varios inmuebles para ampliación de las dependencias del Congreso de la Nación. Se aprueba.

12.—A moción del senador De Paolis, se autoriza a la Presidencia a comunicar a la Honorable Cámara de Diputados las sanciones del Honorable Senado.

13.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando la garantía ofrecida por la Nación a un préstamo solicitado al Banco de Crédito Industrial Argentino, por el IAME. Se aprueba.

14.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas, en el proyecto de ley, en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno ubicado en Republiquetas y Andonaegui, Barrio Presidente Perón, de la Capital Federal. Se aprueba y queda convertido en ley.

15.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos, en el proyecto de ley, en revisión, por el cual se autoriza a la Dirección General de Fabricaciones Militares para vender a ATANOR una fracción de terreno ubicada en Córdoba. Se aprueba y queda convertido en ley.

16.—Consideración del despacho de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en el proyecto de ley, en revisión, sobre organización de los servicios de radiodifusión. Se aprueba y queda convertido en ley.

17.—A moción del senador De Paolis, se resuelve celebrar sesión el día de mañana, a las 9 y 30 horas: sesión secreta, a las 15, y autorizar a la Presidencia a girar directamente a comisión los asuntos que tengan entrada.

18.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

III.—Inserción.

tria química destinada a la producción de insecticidas.

Por las razones que acabo de expresar en forma sucinta, solicito a mis honorables colegas su voto favorable para la aprobación de este despacho.

Sr. Presidente (Correa). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Correa). — Queda convertido en ley.

16

ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE RADIO-DIFUSION

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Comunicaciones y Transportes ha considerado el proyecto de ley, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sobre organización de los servicios de radiodifusión en el país; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del reglamento, este despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 25 de septiembre de 1953.

Prudencio M. Ibarguren. — Paulino B. Herrera. — Francisco Giménez.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(Septiembre 25 de 1953)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Disposición general

Artículo 1º—Es servicio de radiodifusión el que, mediante emisiones sonoras o visuales, transmite directamente al público en general, programas culturales, educativos, artísticos, informativos y de entretenimiento, que respondan al interés general.

TITULO II

Servicio de explotación privada

CAPÍTULO I

Art. 2º—El servicio de radiodifusión, a los fines de esta ley, es de interés público y el Poder Ejecutivo podrá autorizar a particulares

su prestación mediante licencias sujetas a las condiciones establecidas en esta ley y su reglamentación. Las adjudicaciones se harán previa licitación pública mediante pliego de bases y condiciones aprobado por el Poder Ejecutivo.

Art. 3º—Cuando así ocurra, sin perjuicio de lo exigido por el artículo anterior, los adjudicatarios de cada una de las licencias pagarán, además, en concepto de retribución al Estado, por la explotación de las mismas, una contribución anual a determinar por el Poder Ejecutivo, el que queda facultado para incrementar su monto cuando el estado económicofinanciero de las empresas así lo aconseje.

Art. 4º—Excluido el servicio oficial que presta el Estado, la explotación de estaciones de radiodifusión por particulares, su instalación y funcionamiento, se hará sobre la base de tres redes técnicamente orgánicas y aptas para prestar servicio útil a todo el territorio de la Nación.

Art. 5º—La organización y el régimen de prestación de los servicios de radiodifusión se basará en el principio de la subordinación del interés particular, al interés social, cultural, económico y político de la Nación.

CAPÍTULO II

Régimen de las licencias

Art. 6º—Las licencias se otorgarán por el término de veinte años y serán adjudicadas a quienes reúnan las condiciones que se establecen en esta ley, sobre las siguientes bases:

- a) Ser argentino nativo;
- b) Tratándose de personas jurídicas o sociedades, estar constituidas con arreglo a las leyes del país, debiendo el 70 % del capital pertenecer a argentinos nativos;
- c) El presidente y los miembros del directorio de la sociedad deberán ser argentinos nativos y el personal superior de la explotación, tanto técnico como administrativo, deberá ser argentino nativo o naturalizado, pero todos ellos con domicilio real en el país;
- d) Tener un plan de acción dentro de las finalidades consagradas para la radiodifusión.

Art. 7º—Los titulares de licencias, los directores, administradores, gerentes y en general los agentes responsables de la gestión del servicio de una red, no podrán tener interés directo o indirecto en otra red. Las infracciones a esta prohibición podrán sancionarse hasta con la caducidad de la licencia.

Art. 8º—El Poder Ejecutivo con antelación mínima de seis meses a la fecha de expiración del término de la licencia fijada por el artículo 6º podrá llamar a una nueva licitación pública de acuerdo con las prescripciones de esta ley.

En igualdad de condiciones serán preferidos para la adjudicación los ex titulares de las respectivas licencias.

Art. 9º.—Las licencias otorgadas no podrán ser cedidas o transferidas total o parcialmente por ningún título ni acordarse participación en su administración o en su explotación, bajo pena de nulidad.

Art. 10.—Las sanciones a aplicarse por infracciones a la ejecución del servicio se fijarán por el Poder Ejecutivo y no excederán de treinta días de suspensión.

Durante ese lapso podrá obligarse al permisionario a continuar la transmisión sin publicidad comercial.

Art. 11.—La revocación de las licencias no dará derecho al permisionario a reclamar indemnización de ningún género.

Si las instalaciones fueran utilizadas por el Estado serán justipreciadas, a los fines de su adquisición o expropiación, de conformidad con las leyes generales de la materia.

Si las instalaciones o parte de ellas no fueran utilizadas por el Estado, el ex titular de la licencia procederá a su remoción en el plazo que se le fije y en su defecto podrá disponerse por su cuenta y riesgo.

CAPÍTULO III

Régimen del servicio

Art. 12.—Los programas de transmisiones se ajustarán a los siguientes principios generales:

- a) Constituirán un alto exponente de cultura y responderán a un plan de conjunto racional para la elevación del nivel moral e intelectual del pueblo;
- b) Contribuirán a la formación y consolidación de la unidad espiritual de la Nación, de consuno con la obra que el Estado realiza en materia de educación y cultura pública;
- c) Asegurarán una adecuada participación de los valores y motivos culturales, artísticos y tradicionales del interior del país.

Art. 13.—Se prohíbe la transmisión de noticias o comentarios contrarios a las leyes, la moral o buenas costumbres; las que inciten a la traición contra el Estado, a la rebeldía o a la sedición contra las autoridades constituídas; las que puedan provocar la alarma pública o perturbar las actividades económicas o financieras internas; las que pudieran dañar o comprometer las relaciones internacionales del país; las que susciten polémicas o contengan expresiones injuriosas o difamatorias o las que tengan por objeto causar perjuicio moral o material a terceros.

Art. 14.—La difusión de publicidad comercial deberá realizarse de modo que por su magnitud, su carácter y la forma de transmisión no afecte la calidad y jerarquía de los programas.

CAPÍTULO IV

Disposiciones especiales

Art. 15.—Los servicios de radiodifusión estarán exentos de todo gravamen provincial o municipal, creado o a crearse, cualquiera fuere su denominación, con las excepciones siguientes:

- a) Contribución territorial;
- b) Tasas retributivas de servicios de alumbrado, barrido, limpieza, aguas corrientes y servicios sanitarios;
- c) Contribución de mejoras.

Art. 16.—Quedan derogadas las disposiciones que establezcan la prestación gratuita de servicios de radiodifusión, con la excepción de aquellas que determine el pliego de bases y condiciones en virtud del cual se otorguen las licencias.

Art. 17.—Las instalaciones, equipos y demás implementos técnicos afectados directa o indirectamente al servicio de radiodifusión, se declaran relativamente inenajenables en los términos del artículo 2.338 del Código Civil.

Art. 18.—Las obligaciones determinadas por el artículo 342 del Código de Comercio se hacen extensivas a todo aquel que tenga adjudicada licencia para realizar el servicio de radiodifusión, cualquiera que fuese la naturaleza de la sociedad o forma de empresa. Igualmente los permisionarios están obligados a poner a disposición del Poder Ejecutivo todos los elementos necesarios para hacer efectivas las funciones de contralor, ya sean de carácter técnico, administrativo, económico, cultural o de cualquier otro aspecto del desenvolvimiento, que competen al mismo.

Art. 19.—El Poder Ejecutivo podrá, en los casos previstos por los artículos 34 y 83 inciso 19 de la Constitución Nacional, intervenir, suspender o tomar a su cargo, total o parcialmente, el servicio de radiodifusión que realicen las redes privadas.

TÍTULO III

Servicio Oficial de Radiodifusión

CAPÍTULO I

Art. 20.—El Servicio Oficial y el Servicio Internacional de Radiodifusión dependerán del Poder Ejecutivo y se realizarán por el o los organismos que éste designe.

El Servicio Oficial de Radiodifusión tendrá por fines principales, sin perjuicio de los que oportunamente se le fijaren, los siguientes:

- a) Contribuir a consolidar la unidad espiritual de la Nación exaltando las genuinas tradiciones y sentimientos patrios y procurar un mejor conocimiento del país;
- b) Jerarquizar los programas radiotelefónicos mediante transmisiones calificadas y servir de vehículo difusor para la acción del Estado.

En cuanto al Servicio Internacional de Radiodifusión, su objetivo principal será cumplir las tareas específicas de difusión en el exterior que por una acción directa, tienda al mejor conocimiento del país.

CAPÍTULO II

Recursos

Art. 21. — Los fondos para el cumplimiento del Servicio Oficial de Radiodifusión se constituirán con los siguientes recursos:

- a) Los créditos que anualmente fija la ley de presupuesto;
- b) La contraprestación a que alude el artículo 2º y la contribución de carácter anual establecida en el artículo 3º. Esta última será exigida a partir del 1º de enero del año siguiente al de la fecha en que fuera acordada la licencia.

Los recursos precedentemente enumerados constituirán un fondo para el Servicio Oficial de Radiodifusión. Los saldos anuales se transferirán al ejercicio siguiente en el mismo concepto.

Art. 22. — Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

TÍTULO IV

Disposiciones transitorias

Art. 23. — A la promulgación de la presente ley quedan sin efecto las licencias de explotación del Servicio de Radiodifusión y mientras no se adjudiquen las nuevas y se establezca el pleno funcionamiento de la estructura técnica del Servicio de Radiodifusión dispuesta por esta ley, los permisionarios actuales continuarán prestando el servicio a título precario.

Art. 24. — Dentro de los noventa días de la promulgación de la presente, el Poder Ejecutivo llamará a licitación pública por el término de 45 días para el otorgamiento de la licencia de explotación de cada una de las redes a que se refiere el artículo 4º.

Autorízase al Poder Ejecutivo para convenir directamente con los adjudicatarios de la licitación que menciona el apartado anterior, la enajenación de bienes muebles o inmuebles de propiedad del Estado que fueren necesarios para cumplir las finalidades de esta ley.

Art. 25. — Los ingresos aludidos en el artículo 24 serán destinados a la cancelación de las deudas contraídas ante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio con motivo de las adquisiciones de los activos físicos de las estaciones de radiodifusión por el Estado, y al pago de las que, por aplicación de las leyes de previsión social, mantengan las radioemisoras con el Instituto Nacional de Previsión Social y sus secciones a la fecha de la promulgación de esta ley.

El remanente de los ingresos a que se refiere este artículo integrará el Fondo de Recursos para el Servicio Oficial de Radiodifusión, previsto en el artículo 21.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTONIO J. BENÍTEZ.

Rafael V. González.

Sr. Presidente (Correa). — En consideración.

Sr. Ibarguren. — Pido la palabra.

Señor presidente: el proyecto que tiene a consideración este honorable cuerpo y que cuenta ya con la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados, es originario del Poder Ejecutivo, quien lo ha remitido al Congreso de la Nación, juntamente con un extenso mensaje. Tanto el proyecto como el mensaje, demuestran que el Poder Ejecutivo ha hecho un detenido y profundo estudio del problema de la radiodifusión, encarándolo con seriedad y decisión para arribar luego a la solución que nos presenta, y que según el criterio de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que presido y en cuyo nombre hablo, es el mejor y el más beneficioso para los fines del Estado y para la felicidad del pueblo.

Con ese entendimiento, y luego de haberlo estudiado ampliamente, teniendo en cuenta los efectos y las consecuencias que puede originar este proyecto en la actualidad y especialmente en el futuro, la comisión que en este momento represento, sin vacilación, más aún, con toda decisión y el mayor entusiasmo, aconseja la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo con las modificaciones que le ha introducido la Honorable Cámara de Diputados, en la seguridad de que haciéndolo así habremos hecho un bien a la patria y habremos cumplido con el general Perón.

Cuando hace pocos meses el país escuchó con asombro y admiración de boca del señor presidente de la República y de uno de sus ministros, la explicación del contenido y alcance del segundo Plan Quinquenal el pueblo entero de la República, pese a estar ya acostumbrado a la obra deslumbradora e incomparable del general Perón quedó maravillado ante lo que parecía un imposible si no hubiera sido el propio general Perón quien anunciara su realización.

Pero hubo el minúsculo grupo de siempre, el de los descreídos, o, mejor dicho, el de los

que pretenden sembrar el descreimiento, porque debemos dejar aclarado que ellos, como nosotros, creen en Perón, pero que por sus intenciones logreras quieren sembrar la duda y el confusiónismo, ese pequeño grupo, dijo que el segundo Plan Quinquenal era un conjunto de declaraciones líricas y de expresiones ideales, pero que no tenía nada de concreto. Nosotros desde aquí, como ha sido siempre norma del peronismo, vamos a contestarles con hechos, no con palabras, y el proyecto que en este momento nos ocupa, se convertirá dentro de muy poco, en algo concreto, en una ley, ley que habrá nacido de las entrañas mismas del segundo Plan Quinquenal.

Este Plan Quinquenal en su capítulo XXVI, al referirse al objetivo fundamental de la Nación en materia de comunicaciones, expresa que el mismo será el de «disponer de un sistema orgánico y racional de comunicaciones que posibilite su adecuada vinculación interna y con el exterior, y que asegure: la elevación del nivel cultural de la población; la promoción y el desarrollo económico; y su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y de la defensa nacional».

El mismo plan, indica cuál es la función social de las comunicaciones al decir que «la extensión y el mejoramiento de los servicios de comunicaciones, estará primordialmente destinado a consolidar la unidad social del pueblo y mejorar su nivel».

Y refiriéndose concretamente a la radiodifusión, el capítulo respectivo establece que «El Servicio Nacional de Radiodifusión, conducido por el Estado será extendido a toda la Nación como expresión de la soberanía, del país, en orden a la seguridad y la defensa nacional y para elevar la cultura general de la población, mediante: la extensión adecuada de la Red Oficial de Radiodifusión; la instalación de radioemisoras privadas que autorice con asistencia técnica y crediticia del Estado; y la orientación adecuada de las transmisiones internacionales especiales del organismo estatal específico, a fin de hacer conocer la vida y cultura del pueblo argentino, sus realizaciones como aporte a la cultura universal y su doctrina nacional.»

De estas disposiciones teóricas, ideales, o como quieran llamarle el grupo ese a que me he referido, surgen estas disposiciones claras, concretas y precisas que forman este ordenamiento jurídico que pronto será ley y con el cual se encauzará de una vez por todas la organización y el funcionamiento de la radiodifusión en el país, que ha nacido, ha crecido y se ha desarrollado olvidada de los poderes públicos, que al principio no la tuvieron en cuenta, porque no supieron comprender lo que significaría para el futuro del país la radiotelefonía y que luego sorprendidos al ver la importancia que había tomado, pensaron que si a eso se había llegado sin leyes ni reglamentos,

era porque lo más adecuado para la radiodifusión consistía en aplicar el viejo principio de *laissez faire, laissez passer*.

Es que en realidad la radiodifusión fué un invento que sorprendió al mundo, sorpresa de la que nuestro país no quedó exento. El siglo XX quedó maravillado ante lo que pareció ser más obra de magia o de hechicería que el fruto de la inteligencia del hombre.

En nuestro país, para ser más concreto, empezó siendo motivo de experimentación para transformarse en seguida en una actividad mezcla de estudio y de distracción de un reducido grupo de aficionados.

Como es de imaginar fueron obra de la iniciativa privada las primeras manifestaciones radiotelefónicas en la Argentina, fueron simples aficionados los que por distracción o por experimentación pusieron en funcionamiento los primeros transmisores, en su mayoría de onda corta y media. De este carácter fueron las primeras transmisiones radiotelefónicas que cruzaron el cielo argentino.

Esta incipiente inquietud privada no originó, ni siquiera tangencialmente, ninguna preocupación del Estado, cada poseedor de un aparato radiodifusor transmitía lo que más le placía, y un número muy reducido de oyentes escuchaba con sus receptores a galena, lo que en los años 1915 y 16, que es la época a que me estoy refiriendo, era, más que un motivo de distracción, un objeto de curiosidad.

Hasta ese momento el Estado se mantuvo impasible, pero hubo algunos hechos que le obligaron a abandonar su inmutabilidad. En el año 1917, época en que Europa se desangraba en una guerra que por su magnitud se la llamó mundial, la policía de la Capital Federal recibe una denuncia en el sentido de que algunos datos secretos de nuestro ejército eran transmitidos radiotelefónicamente a Alemania. Luego en Rosario se denuncia a una radioemisora como transmitiendo el movimiento de los vapores surtos en ese puerto. Otros hechos parecidos hacen reflexionar a las autoridades del Estado sobre la importancia y alcance de la radiotelefonía y la necesidad de encauzarla.

El 12 de julio de 1917 el Poder Ejecutivo dicta un decreto dividiendo el territorio de la República en dos zonas a los efectos de la jurisdicción sobre las estaciones y servicios radiotelegráficos: la zona marítima, que dependía del Ministerio de Marina, y la zona terrestre, dependiente del Ministerio del Interior.

Todo esto fué el período de gestación, llamémosle así, de la radiotelefonía argentina, pero su alumbramiento, su partida de nacimiento, tiene por data el 26 de agosto del año 1920; es en la noche de ese día cuando se inician los servicios regulares de nuestra radiodifusión. En la fecha mencionada se transmite desde el teatro Coliseo de Buenos Aires la obra de Wágner titulada

«Parsifal». Esta transmisión fué la que inició una serie regular de audiciones, con horario y programa preestablecido.

Estas transmisiones fueron hechas con un transmisor de 5 vatios de potencia y fueron el fruto de la iniciativa de los señores Enrique Susini, Miguel Mujica, Ignacio Gómez y Luis Romero, habiendo quien agrega a estos nombres el del señor César Guerrico. A todos ellos yo he citado intencionalmente en esta oportunidad, porque merecen ser recordados como los pioneros de la radiotelefonía argentina.

De la emoción y el entusiasmo con que fué recibida en el país esta primera transmisión da cuenta la crónica aparecida con ese motivo en el diario «La Razón», de fecha 27 de agosto de 1920, la que, entre otras cosas, dice: «A la maravilla científica sumóse la delicadeza conmovedora que entraña el pensamiento de quienes lanzaron al espacio, sin finalidad interesada alguna, todo el tesoro estético que se encierra en la partitura de Wágner.»

Quienes iniciaron las transmisiones en forma regular formaron luego la sociedad «Radio Argentina» y obtuvieron la primera licencia de radiodifusión otorgada en el país. Esta radio funcionó sin espíritu comercial ya que no tenía ninguna fuente lucrativa de recursos y era sostenida únicamente por el entusiasmo de sus propietarios.

Pero como quien inicia una cruzada, cuando el ideal es elevado, encuentra quien lo siga, la idea de los fundadores de «Radio Argentina» fué imitada, y en diciembre de 1922 nace otra emisora, «Radio Sud América», aunque ésta ya no tiene el fin desinteresado de la primera; esta emisora es subvencionada por varias firmas comerciales que desean estimular y fomentar la venta de receptores y material radioeléctrico, que es el ramo que ellas explotaban.

Dado el impulso, iniciada la marcha, el movimiento continúa y al año siguiente, en marzo de 1923, lanza al éter su primera audición «Radio Cultura», la que ya explotaba la publicidad comercial, y de inmediato, en mayo y en octubre, dos nuevas audiciones hacen oír su voz en el espacio.

A todo esto el Estado sigue silencioso, a punto tal que se dió el caso que en el año 1922 la Municipalidad de Buenos Aires concede, por su propia cuenta, un permiso para instalar un servicio de radiodifusión, mediante una ordenanza dictada el 6 de octubre. Pero el gobierno nacional no toma en cuenta la radiotelefonía, y pese a la inquietud demostrada por un grupo de aficionados y a que la radiodifusión había dejado de ser algo teórico, para convertirse en una cosa práctica y concreta, el gobierno no demuestra vislumbrar las proyecciones que adquiriría el nuevo invento.

Pero la radiotelefonía sigue tomando incremento en el país, a punto tal que el Ministerio

de Marina creyó llegado el momento de intervenir, ya que la ciudad de Buenos Aires, donde mayormente se desarrolla esta actividad, estaba comprendida en la «zona marítima» que estaba bajo su jurisdicción, y consecuencia de ello fueron las cinco licencias que otorgó a otras tantas estaciones que ya funcionaban.

El 27 de mayo de 1924 el Poder Ejecutivo nacional abandona su mutismo y dicta un decreto fijando normas «para regularizar el funcionamiento de las estaciones radioeléctricas de broadcasting instaladas con el propósito de difundir noticias de interés general, conferencias, conciertos vocales o instrumentales, audiciones teatrales y otras manifestaciones culturales, como así también el de las destinadas con fines experimentales o de estudios».

Cabe destacar, que en el año en que el Poder Ejecutivo dicta este decreto, es decir, en 1924, funcionaban en el país siete estaciones en la Capital Federal y tres en el interior.

En el transcurso del año 1925 la radiotelefonía argentina va dejando de ser un motivo de curiosidad y de ensayo para ir poniendo de manifiesto su importancia y sus verdaderas proyecciones. El comercio ve en ella un moderno vehículo de publicidad y la propaganda resulta para las radioemisoras una importantísima fuente de recursos financieros. La actividad radioeléctrica resulta una lucrativa actividad comercial. Demostración elocuente de ello es el interés que se manifiesta en el pedido de licencias y el hecho de que en el año 1928 existieran 20 radiodifusoras en la Capital y 16 en el interior.

En 1928 es cuando el Poder Ejecutivo parece notar recién que la radiotelefonía es una realidad en el país y con fecha 21 de noviembre dicta un decreto un tanto elemental, en el que entre otras actividades queda comprendida la radiotelefonía. El mencionado decreto dispone el traspaso al Ministerio del Interior de las estaciones radioeléctricas del servicio público del Ministerio de Marina y establece que quedarán sometidas a la jurisdicción y control de la Dirección de Correos y Telégrafos todas las estaciones radioeléctricas del servicio público y privado, las de radiodifusión, experimentales y de aficionados establecidas o que se establecieren en el territorio nacional. Fué a raíz de esta disposición que se creó la sección Radiocomunicaciones en la Dirección General de Correos y Telégrafos y se dictó el decreto del 10 de abril de 1929, de reglamentación de las estaciones radioeléctricas y de radiodifusión.

Pero lo que parece no ser un motivo de preocupación nacional, a estar a las escasas disposiciones vigentes sobre la materia en esa época, resulta ya un problema internacional que da lugar a una convención internacional que se reúne en Washington el año 1927. Consecuencia de ello fué la ley 11.620, promulgada el 13 de septiembre de 1932 que aprobó la Convención

Radiotelegráfica Internacional y Reglamentos General y Adicional anexos a la misma, sancionados el 25 de noviembre de 1927.

El 3 de mayo de 1933 el Poder Ejecutivo dicta para la radiodifusión un reglamento de poca importancia pero de mucha extensión, que luego de derogar el que existía, de fecha 10 de abril de 1929, faculta a la Dirección General de Correos y Telégrafos para completarlo, facultad ésta que es aprovechada por la Dirección citada, para aprobar el 28 de septiembre de 1934, un folleto que viene a complicar más las cosas, por su extensión y falta de unidad orgánica de sus disposiciones.

En 1935 se celebró en Buenos Aires el acuerdo sudamericano regional de radiocomunicaciones, del que tomaron parte Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Este acuerdo fué revisado por el acuerdo de Río Janeiro de 1937, el que a su vez fué reemplazado por el suscrito en 1940 en Santiago de Chile, con la participación de las naciones mencionadas, a las que se sumaron Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

En 1938, cuando el cielo de la patria está poblado y casi saturado de sonidos y palabras irradiadas de las antenas de numerosas radiodifusoras argentinas, el Poder Ejecutivo parece querer abandonar la indiferencia que ha mantenido hasta ese momento frente a la radiotelefonía, y el 7 de julio de ese año dicta un decreto nombrando una comisión para que estudie los permisos otorgados para la explotación de los servicios de radiodifusión, «a fin de estudiar en forma definitiva, y de acuerdo con el interés público general, su organización integral».

Cabe consignar, que esa buena intención que demostró tener el Poder Ejecutivo de entonces, quedó solamente en eso: en buena intención, ya que pese a que la comisión designada cumplió su cometido y elevó al director general de Correos y Telégrafos el 19 de abril de 1939 un extenso informe, cuyas conclusiones hizo suyas el director general al elevarlo, el 2 de mayo del mismo año, al Poder Ejecutivo, dicho estudio e informe no tuvo ningún resultado práctico ni se concretaron sus conclusiones en ninguna disposición legal.

En una palabra, señor presidente, lo que pareció ser un despertar del gobierno en materia de radiodifusión, fué sólo un cambio de posición en el lecho para seguir dormitando más cómodamente, pese a que en los considerandos del decreto se reconocía que no había sido posible depurar los programas de los vicios de que adolecían y de «que la prolongación de este estado de cosas amenaza invalidar la obra civilizadora de la escuela, del libro y de los centros de cultura en virtud de la gravitación social y de la influencia que la radio ejerce en el seno mismo de los hogares».

Ni aun así, ni reconociendo el peligro que

entrañaba para la educación y la cultura del pueblo las transmisiones radiotelefónicas y a pesar de tener un estudio más o menos serio sobre la radiotelefonía y unas conclusiones que podían ser o no aceptables, pero que había que encarar de una vez por todas por ese mismo peligro que significaba, ni aun así, el Poder Ejecutivo creyó llegado el momento de dictar una ley que organizara los servicios de radiodifusión en el país; su acción se limitó a dictar decretos de mero trámite, pero sin encarar ni resolver el problema que no admitía dilación.

Apenas cambia el estado de cosas en el país, en cuanto comienza a alborear el día de la nueva Argentina, el Poder Ejecutivo consciente de lo que significa la radiotelefonía en la vida de una nación, comienza a dictar decretos sobre la materia en el afán de poner fin al desorden existente y encauzar este moderno medio de comunicación que, como hemos dicho, representaba un verdadero peligro para la salud moral del pueblo.

El 14 de junio de 1943, por resolución de la Dirección General de Correos y Telégrafos se crea el Consejo Superior de las Transmisiones Radiotelefónicas el que deberá visar toda conferencia, comentario u obra teatral antes de ser irradiado.

Pocos días después, el 18 de junio del mismo año, el Poder Ejecutivo dispuso que la Dirección General de Correos y Telégrafos estudie los antecedentes de los permisos otorgados; uno de los objetivos de esta medida era, según los considerandos del decreto, evitar el posible monopolio que la Dirección precitada denunció haber comprobado se estaba formando.

Desde entonces y hasta la actualidad, son innumerables las resoluciones dictadas para reparar las fallas y los desbordes a que había llegado la radiotelefonía argentina por la pasividad de los gobiernos anteriores. Como ejemplo de ese abandono y de esa pasividad, baste decir que por ausencia de una ley sobre la materia que tratamos se ha venido aplicando por analogía la ley de telégrafos, número 750½, cuya promulgación data del año 1875, la número 4.408 del año 1904 y la número 9.127 del año 1913.

Esta falta de legislación suplida con leyes anacrónicas, aplicadas por analogía, debe haber sido lo que movió al Poder Ejecutivo a dictar el decreto número 23.408 de fecha 4 de septiembre de 1944 que dispone el estudio de los diversos problemas de orden técnicolegal, artístico, cultural y económico-financiero que plantea la radiotelefonía argentina y a tal efecto, se designó una comisión especial, que al poco tiempo, se expidió presentando un anteproyecto de estructuración integral aplicable a la radiodifusión.

«Los resultados de este estudio —dice el Poder Ejecutivo en su mensaje— están condensados en los informes producidos, y el proyecto de ley que se acompaña refleja las conclusiones a que se ha arribado.»

Resumiendo, señor presidente, podemos decir, que a pesar de la importancia adquirida en nuestro país por la radiodifusión y pese a los múltiples problemas que la misma origina, el régimen administrativo y legal en esta materia es casi nulo, o por lo menos sumamente deficiente. Ningún gobierno anterior al actual se preocupó por reglar el servicio de radiodifusión y así hemos llegado a nuestros días sin ninguna ley que lo contemple. Sólo hay tres leyes que lo citan de paso, y ninguna trata de organizarlo ni de reglamentarlo: la 11.581, que mantiene en vigor un decreto que tiene relación con la radiodifusión, la 11.620 que aprueba la Convención Radiotelegráfica Internacional, el reglamento general y el reglamento adicional sancionados por la Conferencia Internacional de Washington el año 1927 y la ley 11.723 sobre régimen legal de la propiedad intelectual, que al referirse a la ejecución o publicación de obras literarias, científicas o musicales cita a la radiotelefonía. Fuera de estas leyes, sólo existen decretos y resoluciones emanados del Poder Ejecutivo nacional y de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Frente a esta orfandad de legislación, frente a la despreocupación a que nos han acostumbrado los gobiernos anteriores, cómo no vamos a recibir con júbilo y apoyar con entusiasmo una ley tan necesaria e imprescindible que viene a llenar un enorme vacío y que va a substituir los parches y remiendos que se hacían por decreto, por un cuerpo legal que ha conseguido abarcar todos los problemas que crea la radiodifusión y le da la solución a cada uno de ellos.

Parece mentira que se haya llegado a esta altura de la vida institucional argentina, que se haya llegado a esta altura del adelanto técnico y científico de la radiotelefonía sin una disposición legal que la reglamente.

Si uno se detiene un momento a pensar, no sabe si a ello hemos llegado por la eterna despreocupación de los gobiernos anteriores o por la falta de inteligencia para compenetrarse de la importancia de algo que si bien empezó, como dije, siendo un motivo de experimentación y de entretenimiento, hoy ha superado esa etapa y tiene una finalidad mucho más superior que cumplir.

Porque la radiotelefonía, por esa facilidad que tiene para expandirse por el espacio de ondas hertzianas, ha llegado a convertirse en un agente al cual no se le pueden oponer vallas ni prohibiciones, sale de las fronteras de la patria y entra en los hogares sin que se lo pueda evitar, por eso mismo, bien administrada puede ser agente de cultura y civilización, ya que resulta el instrumento más eficaz para difundirlas, pero dejada en manos de gente inescrupulosa, o malintencionada, o tan sólo despreocupada e incapaz, puede llegar a convertirse en un instrumento de regresión o de incultura.

Por su rapidez y alcance, la radiodifusión une

instantáneamente a los pueblos, facilita el conocimiento recíproco de los mismos y es vínculo de unión y de solidaridad humana.

Por estar al alcance del pueblo, a la vez que es un motivo de deleite y de esparcimiento cómodo y económico, resulta durante muchas horas al día un agente de educación y de cultura, al par que por la publicidad que difunda resulta un agente propagandista que el comercio tiene destacado en cada hogar, lo que influye en el aumento de las ventas con la consiguiente repercusión en el orden económico.

Contemplada la radiodifusión desde el punto de vista de la defensa nacional, su importancia es evidente, la celeridad que reporta para transmitir noticias y dar órdenes hace que las mismas lleguen a las regiones más apartadas de un país al instante mismo que se las hace conocer, pero para ello lógicamente es necesario una eficiente organización y una racional distribución de las estaciones transmisoras.

En el orden interno la radiotelefonía coadyuva a asegurar la paz interna y contribuye a la unificación política de una Nación, siendo este beneficio mucho más apreciable en un país como el nuestro, que une a su gran extensión su escasa densidad demográfica y en el que muchas veces esa misma extensión o los accidentes naturales de su suelo impiden otro medio de comunicación más o menos rápido.

En el orden internacional, por esa facilidad que tiene la radiotelefonía de atravesar fronteras sin poder oponerse los Estados limítrofes a su paso, puede originar problemas internacionales, lo que ya ha dado origen a numerosas conferencias internacionales, pero, además, la calidad de los programas que se irradian, al ser captados por otros países, puede ser motivo de prestigio o desprestigio del país que los emite.

Todas estas reflexiones, y muchas más, debe haberse hecho el Poder Ejecutivo, las que unidas a la falta casi absoluta de legislación en la materia, lo ha impulsado a presentar al Congreso de la Nación la primera ley sobre radiotelefonía.

Pero para proyectar la ley que tenemos en consideración, el Poder Ejecutivo ha tenido, sin duda, que estudiar cuáles eran los sistemas o formas de prestación de los servicios de radiodifusión. A este respecto, cabe recordar que la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo en el año 1938 para el estudio de la radiodifusión, señalaba en su informe que el ejercicio de la radiotelefonía por múltiples permisionarios privados era inconveniente para nuestro país y en substitución de ello aconsejaba dos soluciones, o bien la explotación directa por el Estado de los servicios radiotelefónicos, lo que equivalía a decir su nacionalización, o bien que dichos servicios fueran explotados «por una entidad particular centralizada, a quien el Estado concede, contractualmente, la facultad de realizar

aquéllos, bajo un régimen jurídico similar al de cualquier otro servicio público, pero con la dirección del Estado».

En la actualidad, los sistemas típicos de prestación del servicio radiotelefónico, agrupándolos por sus características similares más sobresalientes, pueden clasificarse en tres grupos: el de ejecución directa por el Estado; el de ejecución por medio de concesionarios o permisionarios privados y, por último, el de prestación de estos servicios por sociedades mixtas o semioficiales.

El primer y el tercer grupo, integran el llamado grupo europeo, cuya característica es: explotación oficial o semioficial financiada con los recursos provenientes del cobro de una tasa a los propietarios de receptores.

El segundo grupo corresponde al llamado grupo americano: la explotación se hace por particulares en forma privada, y su costo es solventado mediante la lectura de avisos publicitarios.

Dentro de los grupos indicados, hay una amplia gama que va desde el monopolio absoluto por parte del Estado, como en Alemania, hasta el organismo autónomo, como en Inglaterra, pasando por el sistema mixto y original de Holanda y el de financiación múltiple de Italia.

Pero cualquiera sea el sistema adoptado o el grupo a que pertenece un país, todos tienen una característica común: la organización directiva centralizada y el número de estaciones y su distribución, sujetas a un ordenamiento que coordina los preceptos técnicos con las necesidades públicas, es decir, que podrá haber diferencias de detalle, pero en todos hay un profundo sentido de unidad en el concepto orgánico.

El estudio de la organización radiotelefónica extranjera nos presenta un panorama similar al nuestro en cuanto a su nacimiento y su desarrollo. Todas las naciones han pasado por la primera etapa de la iniciativa privada: las estaciones radiotelefónicas actuaban independientemente unas de las otras, es decir, cada emisora tenía una dirección independiente y autónoma. El Estado, mientras tanto, las deja nacer y desarrollarse, sin inmiscuirse mayormente.

La segunda etapa es la de la organización del servicio radiotelefónico por parte del Estado; los gobiernos dictan normas y reglamentan el funcionamiento, pero dejan librada a la iniciativa privada la propiedad y la dirección de las estaciones radiotelefónicas. Pero este sistema también fracasa por varios motivos, siendo el principal el hecho de que la individualidad del sistema de administraciones múltiples e independientes imposibilitan dar a la organización del servicio radiotelefónico su unidad orgánica y funcional.

Frente a este impedimento de organización, todas las naciones reaccionan y se produce la tercera etapa de la radiotelefonía europea, que en sus características generales es igual a la que vamos a iniciar nosotros; luego de entrar en vigencia esta ley, se cambia el sistema individualista o autonómico por el de la centralización directiva ejercida por un organismo del Estado, o por lo menos, en el cual el Estado tiene principal injerencia.

Desde el punto de vista técnico también todas tienen cierta similitud, prefiriéndose el sistema de transmisión en cadena. La ubicación y la potencia de cada estación está dada de acuerdo a la función de eslabón que desempeñan en la cadena, para que cada emisora tenga un radio de acción, pero para que en ese radio no se superpongan dos emisoras, por resultar ello inútil y antieconómico.

En definitiva, podemos decir que en los países europeos tomados en conjunto, los rasgos sobresalientes que privan en su organización son: explotación del servicio mediante una dirección única, en vista de la unidad funcional hecha por el Estado o por los organismos en los que el Estado interviene, y funcionamiento en cadena o red técnica y racionalmente estructurada.

Hasta aquí me he referido a la radiotelefonía extranjera, tomadas a las naciones en conjunto y reuniendo sus características más sobresalientes y similares. Este estudio da amplia razón a los autores de nuestro proyecto, al par que nos señala que estábamos atrasados en una etapa en la organización de nuestra radiotelefonía.

Quiero ahora referirme a grandes rasgos a la organización de la radiodifusión en cada una de las naciones extranjeras tomadas en particular, analizando únicamente a las que se considera la tienen mejor organizada.

Inglaterra se inició en la vida radiotelefónica seis meses antes que nosotros y en forma muy similar, también con la transmisión de un concierto, el 23 de febrero de 1920.

La explotación del servicio radiotelefónico fué hecha por una compañía privada, hasta que por real decreto del 1º de enero de 1927, se encomienda dicha explotación a la British Broadcasting Corporation (BBC), que monopoliza la prestación del servicio en Inglaterra. Este organismo está dirigido por un consejo de siete miembros nombrados por el gobierno, y actúan de acuerdo a un convenio celebrado con el director general de Correos y Telégrafos.

En Inglaterra la superintendencia del servicio y su contralor y vigilancia la efectúa la Administración General de Correos y Telégrafos, quien es además la encargada del cobro de la tasa anual que se aplica a cada poseedor de un radio-receptor. La superintendencia que ejerce Correos y Telégrafos es tan amplia que puede prohibir la difusión de cualquier programa y puede obli-

gar a la corporación a la transmisión de lo que estime conveniente.

La forma habitual de transmisión es en cadena, pudiéndose escuchar un mínimo de dos programas en cualquier lugar del país.

Veamos ahora Francia. Esta nación inicia sus emisiones en forma regular en 1922 por medio de una estación oficial instalada en la torre Eiffel. En 1923 se declara a la radiodifusión monopolio del Estado, aunque permite la subsistencia de estaciones privadas. En realidad, su sistema de explotación era similar al actual nuestro; cuenta con la red oficial del Estado, explotada por un organismo que depende del Ministerio de Correos y Telégrafos, y tiene además empresas privadas que explotan la publicidad comercial y están sometidas a la superintendencia de Correos y Telégrafos.

La tendencia manifiesta en Francia es la del monopolio estatal, tratándose de suprimir las estaciones privadas.

Las transmisiones se hacen por medio de dos redes: una del Estado y otra particular. Las estaciones están técnicamente ubicadas, de manera que los programas pueden ser oídos en todo el territorio. La red oficial es sostenida por el cobro de una tasa a los receptores y un impuesto a las válvulas, mientras que la privada explota la publicidad. En ambas cadenas el Estado ejerce un control previo sobre informaciones de política interior y exterior y sobre cuestiones económicas y sociales.

Pasemos ahora a Estados Unidos de América. Allí se registra como fecha de la primera emisión radiotelefónica el día 2 de noviembre de 1920. La iniciación de la radiodifusión en Norteamérica fué parecida a la nuestra. Impera el régimen individualista. Las estaciones nacen y se multiplican por obra de la iniciativa privada. A partir del año 1926, el panorama cambia fundamentalmente; las radios se van agrupando en dos grandes cadenas privadas, que ya en el año 1938 agrupan a 266 estaciones, sin que por eso dejen de existir pequeñas estaciones de propiedad privada. La supervisión del servicio radiotelefónico la realiza el Estado por medio de la Comisión Federal de Comunicaciones. La fuente de recursos de la radiotelefonía estadounidense la constituye la publicidad comercial.

Una nación donde la radiodifusión está organizada en forma muy distinta a las demás, es Holanda. Allí existen dos grandes puestos emisores, desde los cuales cinco asociaciones de auditores irradian sus programas alternativamente durante los horarios de transmisión. La superintendencia del servicio radiofónico la ejerce un organismo central, cuyo consejo directivo está compuesto por representantes del Consejo de Radio, dependiente del Ministerio del Interior, representantes de Correos y Telégrafos y representantes de las asociaciones de

auditores. El Estado posee el 60 por ciento de las acciones de la entidad, y el resto, las asociaciones.

El Estado ejerce un contralor preventivo y represivo. Las radios holandesas no transmiten publicidad comercial, son financiadas por contribuciones voluntarias de los oyentes, quienes sólo están obligados a denunciar a Correos y Telégrafos la tenencia de sus receptores.

Para no extenderme en este estudio, quiero, por último, referirme a Japón. Allí se fundó, en 1926, una sociedad que monopoliza el servicio y a la que se dió carácter de entidad de utilidad pública. Este organismo se sostiene por la tasa que pagan los poseedores de aparatos radiotelefónicos. Las transmisiones de las radios niponas se hacen en forma coordinada y en cadena.

Estos son, a grandes rasgos, los antecedentes extranjeros que nos demuestran que si bien las naciones aceptaron en su principio el régimen individualista o privado de explotación, luego reaccionaron nacionalizándolo, o por lo menos fiscalizándolo y reglamentándolo, creando organismos de Estado para su coordinación y contralor.

El proyecto de ley que nos ocupa, no se ha decidido ni por la prestación directa del servicio radiofónico por parte del Estado, es decir, su nacionalización, ni por la prestación por particulares concesionarios o permisionarios. En lugar de resolverse por uno de estos dos sistemas, adopta un tercero, el tipo mixto: una parte del servicio lo realizará directamente el Estado, y la otra parte será realizada por particulares, a quienes la ley les recuerda que deberán subordinar su interés particular al interés social, cultural, económico y político de la Nación, porque «el servicio de radiodifusión, a los fines de esta ley, es de interés público».

Como es sabido, hasta ahora el servicio radiofónico era prestado, en su gran mayoría, salvo algunas estaciones oficiales, por particulares a quienes se les otorgaba licencia con permiso precario. Los permisionarios eran muchas veces los que llegaban a fijar el lugar de instalación de las estaciones transmisoras, y por eso es que su distribución en el país no es la más adecuada y eficiente. Como la radiodifusión era considerada un negocio lucrativo, trataban de establecerse en los lugares más densamente poblados, porque eran los que les ofrecían mayores perspectivas económicas. Esa superposición de estaciones en las grandes ciudades llegó a ser antieconómica, por la competencia que se entablaba entre ellas y por lo innecesarias que resultaban, desde el punto de vista de la cultura, del esparcimiento y de la publicidad comercial, tantas transmisoras agrupadas en un mismo centro, mientras que algunas regiones importantes del país recibían las transmisiones con dificultad y muchas veces no las recibían porque la onda no llegaba.

Convertido en ley este proyecto, estas deficiencias no volverán a presentarse, y no volverán a presentarse porque el anterior sistema de otorgar permisos precarios para explotar una transmisora y ubicarla muchas veces a voluntad del peticionante desaparece, en adelante el servicio de radiodifusión será prestado al país por medio de cuatro grandes redes de estaciones transmisoras, de las cuales, una será oficial y las otras tres particulares.

Las tres redes particulares tendrán el número de estaciones, su ubicación y su funcionamiento fijado por el Estado, de manera que sean «técnicamente orgánicas y aptas para dar servicio útil a todo el territorio de la Nación».

Cada red deberá ser propiedad de una sola persona, física o jurídica, y se otorgará la licencia por el término de veinte años, previa licitación pública, con lo que desaparecen los permisos precarios y se dan más garantías y seguridad, en lo que a duración de la licencia se refiere a los nuevos titulares de las mismas.

Dada la marcada influencia que la radiotelefonía ejerce en la vida económica, política, social y cultural del país, no podía dejarse su ejercicio en manos extranjeras, que podían desvirtuar por falta de compenetración la orientación nacional que la misma debe tener, por eso, se exige a los titulares de licencia, si es persona física, ser argentino nativo, y si es persona jurídica o sociedad, estar constituida con arreglo a las leyes del país y que su capital en un 70 por ciento por lo menos pertenezca a argentinos nativos. La misma exigencia de la nacionalidad se tiene para con los miembros del directorio de las sociedades, a todos ellos, incluso al personal superior de explotación, técnicos o administrativos, se les exige tener su domicilio real en la República Argentina.

Con el objeto de impedir el monopolio de hecho en la explotación de los servicios de radiodifusión, aprovechando la experiencia que se ha adquirido del estudio de la radiotelefonía en otros países, donde pese a una aparente libertad y facilidad en la obtención de una licencia y en la explotación de una radiodifusora, los grandes capitales, actuando como en cualquier otra actividad lucrativa, se convierten en pulpos y se apropian disimuladamente, con artimañas y engaños, de toda la actividad de un mismo género, para evitar competencias y ser los únicos en el ramo que explotan, para evitar esto, digo se deja establecido en el proyecto que estamos considerando, que los titulares de la licencia de una red no pueden tener interés directo o indirecto en otra red. Pero va aún más allá el proyecto, porque esta prohibición no rige únicamente para los titulares de licencia, sino que se extiende al personal superior de la red, como por ejemplo los directores, administradores, gerentes, etcétera.

Con esta prohibición queda asegurada, como dije, la imposibilidad del monopolio de hecho, pero para el supuesto caso de que por una maniobra oculta pudiera burlarse esta disposición de la ley, la misma fija la penalidad para el caso de ser descubierta la violación y prescribe, para ese caso, hasta la caducidad de la licencia.

De los requisitos que se exigen para el otorgamiento de las licencias, como el ser argentino, no tener interés en más de una cadena, etcétera, surge claramente que se le ha dado mucha importancia a la persona titular de la licencia, lo cual es muy acertado; por eso mismo se prohíbe la cesión total o parcial de la licencia o su transferencia, y también acordar participación en la administración o explotación, todo lo cual, en caso de infringirse, se pena con la nulidad.

La orientación que se le quiere dar a la radiotelefonía argentina surge de la lectura del capítulo III, título 29 del proyecto enviado por Diputados, titulado «régimen de servicio»; en él se fijan los principios generales dentro de los que tendrán que encuadrarse los programas de transmisión.

Un aparato radiorreceptor era considerado, años atrás, como un artículo de lujo; su alto costo convertía su adquisición en algo imposible para un obrero. Con el salario de hambre que ganaba un trabajador nunca llegaba a adquirir ni las cosas de más imprescindible necesidad; siempre quedaban necesidades que el sobre de la paga no alcanzaba a cubrir. ¿Cómo entonces podían pensar ni aun remotamente en adquirir un radiorreceptor?

Pero los tiempos cambiaron. Con la llegada del general Perón al gobierno el standard de vida de la clase trabajadora cambió fundamentalmente, a punto tal, que lo que antes era artículo de lujo hoy es cosa común en cualquier hogar obrero; el radiorreceptor ya no es un lujo: es una necesidad que cualquier trabajador puede satisfacer en la actualidad; en la nueva Argentina podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe una casa, más aún, ni un rancho, que no tenga su aparato de radio.

Si pensamos que en la actualidad en cada hogar hay un radiorreceptor, y si tenemos en cuenta que los programas radiofónicos son escuchados por todos los miembros de la familia, fácil es imaginar la importancia y la influencia que ejercen en la moral y en la cultura del pueblo los programas radiales. Bien orientados pueden elevar la moral, los sentimientos y la cultura de un pueblo, pero en el caso inverso su resultado será muy distinto también. Por ello no es posible dejar al arbitrio de la mayor o menor capacidad y a la cultura o incultura de un director artístico la orientación de los programas radiales, dada la repercusión social que ellos tienen; debía, lógicamente, fijárseles

una norma dentro de la cual actuarán más o menos libremente, pero sin salirse de su patrón.

Con esa inteligencia, el proyecto fija en los tres incisos del artículo 12 los principios generales a que deberán ajustarse los programas de transmisiones, prescribiendo que los mismos constituirán un alto exponente de cultura para la elevación del nivel moral e intelectual del pueblo; que contribuirán a la formación y consolidación de la unidad espiritual de la Nación y que asegurarán la participación de los valores y motivos culturales, artísticos y tradicionales del interior del país.

Aunque por lo lógico parecería innecesario, pero para que no haya lugar a dudas, el artículo 13 establece concretamente la prohibición a la transmisión de noticias y comentarios. La claridad con que ha sido redactado hace innecesaria su explicación, y su sola lectura es la mejor fundamentación para apoyar esas restricciones.

Pese a que la cuestión publicidad comercial está más o menos reglamentada en la actualidad, ella conspira muchas veces contra el valor o la jerarquía artística de un programa radiotelefónico; el afán de lucro de las empresas radiodifusoras y el deseo de los anunciantes de aprovechar el máximo espacio concretado, hace decaer la calidad de un programa; con esa experiencia y para evitar que en esta nueva etapa de la radiodifusión el mal continúe, se establece en el artículo 14 que «la difusión de publicidad comercial deberá realizarse de modo que por su magnitud, su carácter y la forma de transmisión no afecte la calidad y jerarquía de los programas».

El capítulo 4 del título II del proyecto, titulado «Disposiciones especiales» exime a la radiodifusión de todo gravamen nacional, provincial o municipal creado o a crearse, con excepción de los que se mencionan expresamente.

En este mismo capítulo del proyecto se prescribe que quedan derogadas las disposiciones que establecen prestaciones gratuitas de servicio de radiodifusión y que se declaran inenajenables las instalaciones, equipos y demás implementos técnicos afectados directa o indirectamente al servicio de radiodifusión.

Puesta en ejercicio la ley que nacerá de este proyecto, los programas radiales deberán, como he dicho, ser un alto exponente de cultura, ya que ésa debe ser la misión de nuestra radiotelefonía, pero si ésa será la obligación ineludible de los particulares propietarios de broadcastings, con mayor razón debe ser también la del Estado, y así se dispone en el título denominado «Servicio oficial de radiodifusión»; este servicio, dice, dependerá del Poder Ejecutivo y serán sus fines principales contribuir a consolidar la unidad espiritual de la Nación y procurar un mejor conocimiento del país y jerarquizar los programas radiotelefónicos mediante

transmisiones calificadas y servir de vehículo difusor para la acción del Estado.

En cuanto a los recursos para el Servicio Oficial de Radiodifusión, ellos están previstos en el capítulo 2 del título III. Ellos son los créditos que anualmente fije la ley de presupuesto, la contraprestación que fija el artículo 29 y la contribución anual que fija el artículo 39.

Las «Disposiciones transitorias» constituyen la última parte del proyecto; por la primera de ellas se dejan sin efecto las licencias de explotación del servicio de radiodifusión. Esta medida resulta inobjetable. Si se quiere reestructurar todo el servicio en la forma que se legisla, debe actuarse con toda libertad. Pese a ello los actuales permisionarios continuarán prestando el servicio a título precario hasta que se adjudique la nueva licencia.

El Poder Ejecutivo, procediendo con toda imparcialidad y rectitud, como es su norma, ha proyectado otorgar las licencias de explotación a cada una de las redes a que me he referido anteriormente mediante licitación pública, la que deberá ser efectuada dentro del plazo de noventa días contados desde la promulgación de la ley.

Además se autoriza al Poder Ejecutivo para convenir con los que resulten adjudicatarios de la licitación antedicha, la enajenación de bienes muebles o inmuebles que siendo propiedad del Estado fueran necesarios para cumplir las finalidades de esta ley.

Los ingresos que la enajenación de estos bienes produzca de acuerdo a lo expresado en el artículo 25 del proyecto remitido por la Honorable Cámara de Diputados, serán destinados a la cancelación de las deudas contraídas ante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio a raíz de las adquisiciones por parte del Estado de los activos físicos de las radioemisoras y al pago de las deudas que por aplicación de las leyes de previsión social mantengan al promulgarse la ley las radioemisoras con el Instituto Nacional de Previsión Social.

El remanente de estos ingresos será destinado al fondo de recursos para el Servicio Oficial de Radiodifusión que prevé el artículo 21.

Señor presidente: éste es, en síntesis, el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo con las modificaciones que le ha introducido la Honorable Cámara de Diputados. Repito que la Comisión de Comunicaciones y Transportes lo ha estudiado y por las consideraciones precedentes aconseja su aprobación. El régimen de la radiodifusión en nuestro país cambiará fundamentalmente; el Estado no ejercerá un control asfixiante, pero conducirá los programas en sus principios generales. Podemos aprobar este proyecto en la seguridad de que cuando el mismo se convierta en ley la radiotelefonía argentina habrá dado tal paso adelante que que-

dará a la par de las naciones que la tienen mejor organizada.

Con este nuevo régimen de radiodifusión podemos estar seguros de que los únicos privilegiados de nuestra patria, los niños, podrán escuchar los programas radiotelefónicos sin peligro de extraviar su conciencia, ni de deformar su mentalidad; la juventud podrá encontrar en el radioreceptor un amigo, un compañero, una fuente de distracción y esparcimiento, a la vez que un complemento para su educación y su instrucción, y el pueblo entero tendrá en los programas radiales una fuente de cultura que contribuirá a su superación artística, moral e intelectual y que servirá también a la consolidación de la unidad social de los habitantes de nuestra patria.

Todo esto en el orden interno, y en el internacional la radio, que como he dicho no conoce de limitaciones ni de fronteras, servirá para hacer conocer al mundo cuál es el grado de civilización y de cultura alcanzados en la nueva Argentina, cuál es nuestro aporte a la cultura universal y cuál es nuestra doctrina nacional; en otras palabras, los programas radiales transmitidos después de la reestructuración de la radiotelefonía argentina, al transponer nuestras fronteras, servirán para hacer conocer en el extranjero cómo piensa, cómo siente y cómo vive el pueblo argentino en esta etapa feliz de la recuperación nacional que hoy estamos viviendo, gracias a ese ejemplo de gobernante que es el general Perón y a la obra e inspiración de la mártir de la argentinidad que fuera Eva Perón.

Nada más, señor presidente. (*Aplausos prolongados.*)

Sr. Giménez. — Pido la palabra.

Señor presidente: la importancia de este asunto y, más que nada, el recuerdo de lo que ha sido y de lo que ahora es la radiodifusión, me lleva a decir unas pocas palabras en ocasión que me parece propicia.

Para los hombres de tierra adentro, hablar de radiotelefonía en la Argentina peronista es recordar muchas cosas que han quedado grabadas en la memoria y en el corazón del pueblo.

Este instrumento de difusión es un arma formidable, y el proyecto que consideramos, como todas las iniciativas del Poder Ejecutivo de la Nación, con nuestro ilustre presidente por conductor, tiende a que sin incurrir en el monopolio de la radio por el Estado, éste tenga en sus manos los elementos indispensables para evitar que, como en épocas anteriores, el poder inmenso de la radiodifusión esté entregado a intereses antiargentinos.

Me van a permitir un recuerdo y una reflexión. Para quienes viven en el torbellino de esta ciudad inmensa, donde los diarios, los canillitas, los pizarrones y las conversaciones

difunden las noticias al instante, el receptor de radio es un instrumento para cuando sobra el tiempo, en los descansos del hogar o cuando por comodidad se escucha cómodamente sentado lo que ocurre por todo el mundo. Pero para millones de argentinos que viven lejos de la Capital Federal, los receptores condensan todo, la actividad comercial, la situación política, los resultados deportivos, las cotizaciones de los productos, las resoluciones del gobierno en los diversos asuntos de interés general, los pronósticos del tiempo. Allí donde no llegan los diarios, en los rincones lejanos del campo argentino, en los ranchos de la serranía, en la planicie helada de la Antártida, ese milagro de la onda eléctrica que habla pone a esos millares de seres en contacto con la realidad y la vida.

Gracias a ese instrumento maravilloso supimos los argentinos del interior que una revolución había nacido, más tarde que había tomado cuerpo y después que tenía una bandera y un conductor, Perón, y un alma, Eva Perón.

Gracias a la radio escuchamos aquella tarde, víspera de la batalla electoral, la orden de combate impartida por el jefe del justicialismo.

Por ella supimos día a día, hora tras hora, cómo la voluntad del pueblo expresada en comicios intachables había barrido el contubernio de Braden para llevar al sillón de Rivadavia al más grande de los argentinos de este siglo, al sucesor directo del Libertador San Martín.

Nuestra radio, ya argentinizada, está asociada a los grandes días de regocijo, de afirmación partidaria, de alerta para el sentimiento público. Ella nos transmitió diariamente la palabra estremecida de patria de nuestro líder, ella sonó más argentina después del 17 de octubre, así como se convirtió en sollozo cuando la voz inolvidable de Evita selló, con su renunciamento a los honores, el más grande gesto que haya tenido mujer alguna sobre la tierra.

Y ninguno de nosotros olvidará nunca cuando, opaca y temblorosa, habló en la hora terrible en la cual la Jefa Espiritual de la Nación entró en la inmortalidad.

Todos estos recuerdos, que nos son comunes, muestran algunos de los aspectos que hacen resaltar la importancia excepcional de la radiodifusión, que puede estremecernos y alegrarnos, aconsejar y prevenir, pero que también puede mentir y sembrar la confusión. Por eso es imposible que se deje su funcionamiento y explotación exclusivamente en manos de comerciantes.

En esta hora, a la luz de la doctrina peronista y tal como están las cosas del mundo, así como no se concibe que puedan estar en manos de particulares, a veces extranjeros, nuestros transportes, nuestros teléfonos, nuestros telégrafos, tampoco se puede admitir que la difusión radial escape a la vigilancia de los organismos del Estado.

Estas simples consideraciones, señor presidente, son las que me han impulsado a distraer la atención de mis distinguidos compañeros de banca para fundar mi voto favorable a este proyecto, que lo es de una ley necesaria y sana, porque para eso será una ley peronista. *(Aplausos prolongados.)*

Sr. Presidente (Correa). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Herrera. — Señor presidente: voy a permitirme distraer algunos instantes la atención de esta Cámara porque deseo puntualizar ciertos aspectos del asunto en consideración a fin de precisar su alcance y concepto.

El Estado no puede estar ausente en esta materia y su vigilancia es esencial, imprescindible e indispensable, no para cercenar la libertad de nada ni de nadie, antes bien para asegurarla. Algunas cifras bastarán para probar cómo en la República Argentina este problema es de enorme trascendencia. No hablemos de Europa, donde los gobiernos tienen la fiscalización directa de las transmisiones, con sistemas mixtos de explotación. Hablemos de América del Sur y Central y veremos cómo nuestro país supera todo lo previsible en materia de extensión de la radiodifusión.

Cuba tiene 60 estaciones emisoras con 250.000 aparatos receptores; Brasil, 80 estaciones con 800.000 aparatos; Chile, 70 estaciones y 250.000 aparatos. En cambio, en la República Argentina sólo hay 55 estaciones y un millón y medio largo de aparatos receptores. Casi un aparato por cada diez habitantes. Estas cifras demuestran, por lo tanto, que nuestro problema es serio, si dejáramos en manos ávidas de lucro e inescrupulosas semejante fuerza.

Si el gobierno hubiera querido ejercer el monopolio, tendría precedentes y motivos. No lo ha querido así, precisamente, por respetuoso de las libertades, lo que no es lo mismo que tolerante con los libertinajes. La Constitución que nos rige establece que los servicios públicos no pueden enajenarse ni cederse; por eso esta ley no habla de servicio sino de interés público en su artículo 2º.

El proyecto de ley no incluye disposiciones sobre interferencias y ruidos parásitos, puesto que se trata de una ley de fondo, y tales disposiciones, aparte de que pueden ser motivo de reglamentaciones especiales, ya han sido contempladas en las legislaciones de algunas provincias y en ordenanzas municipales.

La verdad es, señor presidente y señores senadores, que se invoca mucho la libertad de expresión con olvido de que, en determinadas épocas y hasta el advenimiento del peronismo, esta libertad estaba en la letra pero no en la realidad de la ley. Los obreros argentinos ni se reunían ni podían expresarse libremente. La prensa grande y chica, estaba entregada a algo peor que al gobierno del país: estaba entregada

a los consorcios e intereses que manejaban al gobierno. La conciencia pública era envenenada por campañas sistemáticas y el fraude político; el fraude electoral era denominado por la prensa de los Paz y sus diarios satélites, y por las emisoras a su servicio, como fraude patriótico. Se manchaba la palabra «patria» como se había manchado a la patria misma. Esa es la libertad que piden y que extrañan los que violaron todas las libertades.

Por eso votamos esta ley, sin retacearla, porque sabemos que le damos al Estado un instrumento de contralor eficaz, porque permite la libre expansión de las iniciativas particulares, porque no va a desfigurar el aspecto de la radiodifusión argentina y por lo contrario la va a afirmar como elemento de argentinidad, como defensa contra lo espurio y lo incorrecto, como refirmación de los conceptos de patria grande, libre y soberana, que son los conceptos del peronismo y de su líder. Por eso la vamos a votar sin vacilaciones, cumpliendo con nuestro deber de legisladores peronistas, de argentinos peronistas. *(Aplausos prolongados.)*

Sr. Presidente (Correa). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Correa). — **Queda convertido en ley.**

17

MOCION

Sr. De Paolis. — Pido la palabra.

Hago moción para que se realice la próxima sesión en el día de mañana, a las 9 y 30, para que el cuerpo celebre sesión secreta a las 15, a los efectos de considerar acuerdos y para que se autorice a la Presidencia a girar directamente a comisión los proyectos de ley que tengan entrada y que provengan del Poder Ejecutivo o de la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Correa). — Se va a votar la moción del señor senador por Mendoza.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Correa). — No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

—Eran las 18 y 35.

CARLOS E. MALLADA.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.